

LEGAJO DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS FORMADO EN LA CAUSA N° CFP 1244/2015, CARATULADA: "N.N. SOBRE INFRACCIÓN ART. 303 DEL CÓDIGO PENAL". J.N.P.E. N° 9. SEC. N° 18. EXPEDIENTE N° CFP 1244/2015/23. ORDEN N° 32.219. SALA "B".

Buenos Aires, de abril de 2025.

VISTOS:

Los recursos de casación interpuestos por S. B. R. y por A. M. contra la decisión de esta Sala "B" de confirmar la resolución por la cual el tribunal de la instancia anterior rechazó las solicitudes efectuadas por las nombradas para que se transfirieran distintas sumas de dinero, secuestradas oportunamente en el marco de un allanamiento y cuya propiedad aducen, a cuentas bancarias abiertas por aquéllas a los fines de concretar una regularización de bienes bajo el régimen del Título II de la ley 27.743 (CPE 1244/2015/23/CA13, res. del 14/02/2025, Reg. Interno N° 14/25).

Y CONSIDERANDO:

1º) Que, a criterio de este Tribunal, conforme fue expresado por numerosos precedentes de ambas salas, no se encuentra legalmente prevista, en el marco procesal vigente, la impugnación por vía de casación respecto de un pronunciamiento como el que es objeto de los recursos interpuestos y, por lo tanto, por los fundamentos desarrollados oportunamente, correspondería declarar la improcedencia de los recursos de que se trata (confr. CPE 742/2018/1/CA2, res. del 27/12/2019, Reg. Interno N° 1028/19; CPE 518/2019/11/CA4, res. del 30/12/2019, Reg. Interno N° 1050/19; CPE 1652/2014/51/3/CA112, res. del 11/02/2020, Reg. Interno N° 24/20; CPE 1260/2019/1/CA1, res. del 4/03/2020, Reg. Interno N° 106/20; CPE 974/2016/8/CA3, res. del 8/07/2020, Reg. Interno N° 277/20; CPE 79/2019/CA1, res. del 4/02/2021, Reg. Interno N° 15/21; CPE 970/2016/11/CA3, res. del 19/02/2021, Reg. Interno N° 60/21; CPE 1052/2014/46/3/CA132, res. del 11/03/2021, Reg. Interno N° 118/21; CPE 938/2020/1/CA1, res. del 10/09/2021, Reg. Interno N° 576/21; CPE 1383/2017/8, res. del 10/02/2022, Reg. Interno N° 25/22; FSM 24005569/2013/14/CA3, res. del 13/04/2022, Reg. Interno N° 145/22; CPE 121/2022, res. del 14/10/2022, Reg. Interno N° 451/22; CPE 1652/2014/21, res. del 21/12/2022, Reg. Interno N° 565/22; CPE 321/2016/27/22/CA29, res.



del 1/02/2023, Reg. Interno N° 11/23; CCC 10369/2017/282/CA6, res. del 9/03/2023, Reg. Interno N° 69/23; CPE 1000/2017/11/RH3, res. del 11/04/2023; Reg. Interno N° 127/23; CPE 495/2018/7/CA1, res. del 4/09/2023, Reg. Interno N° 385/23; CPE 724/2019/7, res. del 5/02/2024, Reg. Interno N° 5/24; CPE 575/2018/33, res. del 6/03/2024, Reg. Interno N° 71/24; CPE 803/2022/CA3, res. del 26/4/2024, Reg. Interno N° 161/24, CPE 1815/2018/4, res. del 14/05/2024, Reg. Interno N° 192/24, CPE 597/2017/CA5, res. del 30/8/2024, Reg. Interno N° 363/24; CPE 591/2018/6/CA3, res. del 6/9/2024, Reg. Interno N° 377/24; CPE 162/2023/2/CA2, res. del 11/9/2024, Reg. Interno N° 381/24, CPE 288/2023/1/CA1 res. del 20/9/2024, Reg. Interno N° 399/24; CPE 956/2018/3/CA2, res. del 23/9/2024, Reg. Interno N° 402/24, y CPE 162/2023/3/CA3, res. del 27/9/24, Reg. Interno N° 418/24 entre muchos otros, de esta Sala “B” y CPE 1561/2018/67/53, res. del 30/12/2019, Reg. Interno N° 870/19; CPE 1288/2019, res. del 14/09/2020, Reg. Interno N° 289/20; CPE 1068/2019, res. del 2/11/2020, Reg. Interno N° 359/20; CPE 967/2019, res. del 4/11/2020, Reg. Interno N° 362/20; CPE 2047/2017/1, res. del 12/02/2021, Reg. Interno N° 25/21; CPE 1051/2018/1, res. del 12/02/2021, Reg. Interno N° 27/21; CPE 138/2017/1, res. del 9/04/2021, Reg. Interno N° 156/21; CPE 1685/2019/1, res. del 22/04/2021, Reg. Interno N° 187/21; CPE 626/2020/1, res. del 25/02/2022, Reg. Interno N° 83/22; CPE 1051/2018/2, res. del 6/04/2022, Reg. Interno N° 159/22; CPE 2028/2018, res. del 11/05/2022, Reg. Interno N° 213/22; CPE 2009/2018/3/CA2, res. del 8/06/2022, Reg. Interno N° 252/22; CPE 763/2015/9, res. del 29/03/2023, Reg. Interno N° 96/23; CPE 1036/2019/1, res. del 5/04/2023, Reg. Interno N° 109/23; CPE 45/2021, res. del 7/06/2023, Reg. Interno N° 235/23; CPE 1327/2018/7, res. del 22/09/2023, Reg. Interno N° 437/23; CPE 845/2016/6, res. del 5/02/2024, Reg. Interno N° 17/24; CPE 1431/2015/16, res. del 19/04/2024, Reg. Interno N° 157/24; CPE 7/2022/9, res. del 29/04/2024, Reg. Interno N° 180/24, CPE 197/2020/4, res. del 21/05/2024, Reg. Interno N° 219/24, CPE 458/2024/1/CA1, res. del 24/09/2024, Reg. Interno N° 417/24; CPE 1108/2018/3/CA3, res. del 24/09/2024, Reg. Interno N° 418/24 y CPE 1184/2016/11/CA5, res. del 24/09/2024, Reg. Interno N° 419/24, entre muchos otros, de la Sala “A” de esta Cámara).

2º) Que, no obstante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 15 de octubre de 2024, mediante el pronunciamiento recaído en autos FSA 003165/2020/3/CS001: “*Incidente N° 3- IMPUTADO: CHACÓN, LUIS GUSTAVO S/Audiencia de Sustanciación de Impugnación (Art.362)*”, resolvió, en un proceso penal regido íntegramente por el Código Procesal Penal Federal, declarar la invalidez constitucional del artículo 350, tercer

Fecha de firma: 01/04/2025

Alta en sistema: 03/04/2025

Firmado por: FEDERICO ROLDAN, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO ENRIQUE HORNOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CAROLINA ROBIGLIO, JUEZ DE CAMARA



#39385380#449939686#20250401114321878

párrafo, del ordenamiento de formas aludido pues estimó que aquel precepto “...no guarda validez constitucional a la luz del principio de razonabilidad, razón por la cual la doctrina del precedente “Di Nunzio” (Fallos: 328:1108) debe ser mantenida...”. Asimismo, estableció que la doctrina referida “...supone atribuirle competencia a la Cámara Federal de Casación Penal para que agote su jurisdicción en la resolución de las cuestiones federales suscitadas en un procedimiento en concreto para preservar, de ese modo, que la función que esta Corte ha caracterizado como la más eminente, sólo resulte habilitada una vez que se encuentre precedida por una discusión más extendida sobre los problemas que el caso plantea...”.

Por lo demás, este Tribunal no desconoce que, posteriormente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en sentido similar en un proceso en el que había intervenido esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico (confr. CPE 1192/2012/9/CS1, caratulado: “AC Blanco S.A. y otros s/ legajo de apelación”, sentencia del 21/11/2024).

El más Alto Tribunal también ha establecido, en numerosas oportunidades, que las instancias ordinarias tienen el deber de conformar sus decisiones a las sentencias dictadas por aquél en casos similares (Fallos 307:1094; 312:2007; 316:221; 318:2060; 321:2294), el cual se sustenta en el carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, y en razones de celeridad y economía procesal que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional (Fallos 25:364; 212:51; 212:160; 256:208; 303:1769; 311:1644; 311:2004; 318:2103; 320:1660 y 321:3201, entre otros).

Por lo tanto, y sin perjuicio de dejar establecido que no se comparte la doctrina que emana de los fallos citados, por el momento corresponde proceder en consecuencia.

3º) Que, en el caso examinado, los recursos de casación interpuestos resultan inadmisibles en tanto la decisión de confirmar la resolución del tribunal de la instancia anterior de denegar las solicitudes efectuadas por S. B. R. y A. M. para que se transfieran fondos -secuestrados en el marco de un allanamiento y cuya propiedad aducen- a cuentas abiertas por aquéllas a los fines de concretar una regularización de bienes bajo el régimen del Título II de la ley 27.743, no constituye una sentencia definitiva, ni puede, en las circunstancias que se verifican actualmente en autos, ser equiparada a una decisión de aquel tipo, en la medida que las nombradas, aun de no revestir la condición de partes en el legajo principal, podrían eventualmente efectuar nuevas solicitudes de devolución con mayores elementos de respaldo y/o de variar las circunstancias que se constataron al momento de resolver.



4º) Que, por lo demás, incluso en la situación hipotética -no verificable en el caso- de estimarse que la resolución recurrida constituye una sentencia definitiva o equiparable a una decisión de aquel tipo, no podría soslayarse que lo que las partes recurrentes pretenden no es sino una revisión de las valoraciones de hecho y de prueba que condujeron a esta Sala “B” a concluir que, al menos por el momento, no se encontraría acreditada la titularidad de S. B. R. y de A. M. sobre las sumas de dinero cuya transferencia solicitaron, sin que se verifique una cuestión federal que pudiese habilitar la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal en el carácter de tribunal intermedio de acuerdo con la doctrina de Fallos 328:1108 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Específicamente, S. B. R. y A. M. buscan reeditar, sin sustento nuevo, el examen sobre la titularidad de las sumas de dinero de las que se trata, lo que conduciría a revisar las valoraciones fácticas y probatorias efectuadas por esta Sala “B” mediante la resolución recurrida, toda vez que no se trata de un caso en el que haya mediado el extremo objetivo a partir del cual, por la ley 27.743 y la reglamentación dictada en consecuencia, se exime al interesado de aportar elementos mayores de respaldo para demostrar la titularidad de las sumas de dinero que se pretenden regularizar, esto es, el ingreso en tiempo oportuno -vía depósito y/o transferencia- de aquéllas en la “Cuenta Especial de Regularización de Activos” instituida por el art. 26 de la ley 27.743.

5º) Que, asimismo, tampoco se advierte que para la solución de la cuestión que debía resolverse en este legajo, se haya encontrado en discusión la interpretación de las cláusulas constitucionales invocadas por las recurrentes, que justifique la competencia de la Cámara Federal de Casación Penal.

6º) Que, por otra parte, en el caso median pronunciamientos concordantes del tribunal de la instancia anterior y de esta Sala “B” con relación a la cuestión objeto de la incidencia, por lo que tampoco podría estimarse en juego o comprometido el principio de la doble instancia (confr. CPE 454/2019/8/CA30, res. del 23/10/2019, Reg. Interno N° 841/19, CPE 720/2020/6, res. del 23/12/2020, Reg. Interno N° 604/20, entre otros, de esta Sala “B” y FCB 22018460/2013/9, res. del 30/04/2021, Reg. Interno N° 195/21 y CPE 220/2021/1/CA1, res. del 06/08/2021, Reg. Interno 373/2021, entre otros, de la Sala “A” de esta Cámara).

7º) Que, en cuanto a la arbitrariedad invocada por las recurrentes para sustentar las impugnaciones en examen, corresponde expresar que, tal



como se ha establecido en oportunidades numerosas: “...el recurso fundado en la doctrina de la arbitrariedad sólo es admitido de manera sumamente restringida (Fallos 296: 120; 289:107), pues no tiene por objeto habilitar una nueva instancia ordinaria en la que puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas (Fallos 295:618; 302:1.564; 306:94; 306:262; 304:267y 375; 303:769, 834, 841 y 1.146, entre muchos otros)...” (confr. Reg. N° 795/04 y CPE 106/2020/CA1, res. del 28/06/2022, Reg. Interno N° 273/22, entre otros, de esta Sala “B” y CPE 222/2023/2/CA2, res. del 27/12/2023, Reg. Interno N° 581/23, entre otros, de la Sala “A” de esta Cámara); y: “...aquella vía queda reservada sólo a supuestos de gravedad extrema en los cuales se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...” (confr. Regs. Nos. 93/05, 137/07 y CPE 1197/2014/2/CA1, res. del 24/04/2019, Reg. Interno N° 246/19, entre otros, de esta Sala “B” y CPE 1016/2017/27, res. del 21/06/2022, Reg. Interno N° 268/22 y CPE 1431/2015/5, res. del 23/06/2022, Reg. Interno N° 274/22, entre otros, de la Sala “A” de esta Cámara).

8º) Que, si bien en los casos en los cuales se invoca la arbitrariedad no corresponde que al momento de examinar la admisibilidad del recurso se realice una apreciación plena y definitiva que implique un examen del Tribunal con relación a la bondad sustancial de las decisiones propias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que corresponde “...resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta respecto de cada uno de los agravios que la originan con fundamentos suficientes para dar sustento, a la luz de conocida doctrina de esta Corte, a la invocación de un caso de inequívoco carácter excepcional, como lo es el de arbitrariedad...” (confr. Fallos 310:2122 y C.S.J.N., FCR 774/2013/CFC1-CS1, “REMOLCOY, Héctor Miguel s/ infracción ley 23.131” , rta. el 06/08/15, considerando 5º, entre otros).

9º) Que, por la resolución recurrida se meritron los elementos de juicio que se estimaron necesarios para resolver la cuestión objeto de recurso (Fallos 251:244) y no hubo un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso. Por esto, y en atención a que la solución alcanzada fue una derivación razonada del derecho vigente en concordancia con las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos 307:74 y 1527; 308:1762; entre otros), en este caso los recursos de casación, fundados en la doctrina de la arbitrariedad, no pueden prosperar.

Por ello, **SE RESUELVE:**

I. DENEGAR los recursos de casación interpuestos por S. B. R. y por A. M. .

II. CON COSTAS (arts. 530, 531 y ccs. del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese de conformidad con lo dispuesto por la resolución N° 96/2013 de superintendencia de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y devuélvase.

Firman sólo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía restante de esta Sala.

